

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	144
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2022-00038-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	HÉCTOR EMILIO LEIVA OROZCO
DEMANDADA:	LA NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ASUNTO:	Declara impedimento

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veintidós (2022).

El señor Héctor Emilio Leiva Orozco, en calidad de fiscal delegado ante los jueces penales del circuito, a través de apoderado especial, y previa inaplicación del artículo 1° del Decreto 3131 de 2005 y el artículo 2 del Decreto 3900 de 2008, deprecó la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la parte accionada le negó la solicitud de otorgarle carácter salarial con fines prestacionales a la bonificación de actividad judicial que viene percibiendo semestralmente y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que le requiera las prestaciones sociales devengadas con la inclusión de dicho emolumento desde el 1 de enero de 2009 y le pague las diferencias insolutas que resulten, debidamente indexadas.

En efecto, el artículo 1° del Decreto 3131 del 8 de septiembre de 2005, modificado por el artículo 1° del Decreto 3382 de 2005, creó en favor de los jueces y fiscales la bonificación de actividad judicial, la cual se reconocerá semestralmente en junio y diciembre de cada año, como un incentivo económico por el buen desempeño de tales funcionarios, cualquiera que sea su forma de vinculación, lo cual significa que el suscrito es beneficiario de dicha remuneración y, como tal, se encuentra en igual posición jurídica que la persona que instauró la demanda de la referencia.

Por consiguiente, es claro que en el suscrito servidor concurre la causal de recusación consagrada en el artículo 141, numeral 1°, del CGP, aplicable por remisión del artículo 130 del CPACA, toda vez que me asiste un interés indirecto en las resultas del proceso, en la medida en que el asunto se contrae a definir si en la liquidación de las prestaciones sociales de los jueces debe incluirse como factor salarial la bonificación de actividad judicial, condición que, como lo anticipé, actualmente ostento.

Ahora bien, el artículo 131 del CPACA dispone:

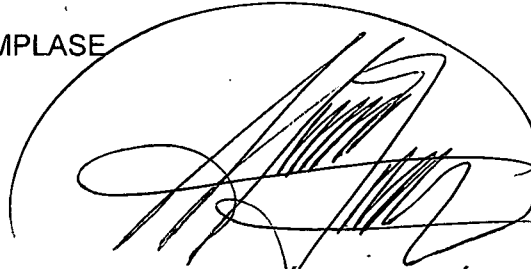
"Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

1. El juez administrativo en quien concorra alguna de las causales de que trata el artículo anterior deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado y, de aceptarla, asumirá el conocimiento del asunto; si no, lo devolverá para que aquel continúe con el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe con el asunto.

2. Si el juez en quien concorra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el Tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto (...)"

Por consiguiente, se ordenará la remisión del expediente al juzgado que sigue en turno de aquellos que no se han declarado impedidos para conocer de este tipo de asunto, para que, salvo mejor criterio, califique el impedimento manifestado por el suscrito, esto es, el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, is written over a faint, large oval shape.

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ

Juez

DSBA